

Globethics Repository



Argentina

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Cheresky, Isidoro
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-09-25 23:17:49
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219381

Argentina.

Posibilidades y obstáculos de la alternancia

Isidoro Cheresky

Isidoro Cheresky: politólogo argentino, docente investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

Palabras clave: elecciones, situación política, cultura política, Argentina.

A medida que se afirma el régimen democrático, las elecciones devienen en el acontecimiento decisivo de la política. Son la principal referencia de periodización y ordenamiento de la vida pública, principalmente para los partidos políticos. Los resultados electorales generan a su vez una representación del estado político de la sociedad que reorienta las expectativas de sus componentes. Las últimas elecciones argentinas han sido también un hecho político por excelencia: la democracia se ha reafirmado como un régimen en que el poder esta en juego ante la ciudadanía y pueden ser desbaratadas las actuales tendencias hegemónicas del oficialismo.

A finales de octubre de 1997 la Alianza por el Trabajo, la justicia y la Educación, una coalición opositora constituida poco antes de los comicios¹, triunfó a nivel nacional y en las provincias más importantes donde la unión se cristalizó². El rotundo resultado constituyó un cambio en la relación de fuerzas en favor de la oposición –45,6 % contra el 36,3% del oficialismo a nivel nacional³– y dispuso el clima hegemónico en que hasta entonces se desenvolvía la vida política. Estas elecciones han permitido constatar un nuevo clima de época, lo que explica que el vínculo político ciudadano haya prevalecido por sobre las ataduras organizacionales partidarias, corporativas y estatales⁴.

¹ La Alianza entre la UCR y el Frepaso se formalizó en un encuentro entre un puñado de líderes a comienzos de agosto, luego de un breve período de negociaciones.

² En diez provincias no fue posible concretar un acuerdo entre las fuerzas de oposición, entre las que se hallan las que tienen gobernadores radicales (con excepción del distrito Capital Federal que tiene un radical como jefe de gobierno pero que es uno de los pilares de la coalición opositora).

³ En realidad estos porcentajes expresan en términos muy generales la relación de fuerzas puesto que adicionar una diversidad de resultados provinciales. La oposición, en las provincias en que se integraron listas únicas de la Alianza, reunió el 36.3% de los votos; a estos porcentajes se hay que agregar el 6,96% obtenido por la UCR y el 2,42% por el Frepaso en los distritos donde no se llegó a la unidad.

⁴ En la Capital Federal la supremacía de la Alianza (56,8%) por sobre el Partido Justicialista (17,9%) ha sido abrumadora, ratificando la relación de fuerzas existente ya en las elecciones para el gobierno de la ciudad del año pasado y reafirmando una tendencia de toda la década.

La evolución de los acontecimientos fue en buena medida sorprendente. El presidente Carlos Menem había ganado ampliamente la reelección en 1995 y aunque después su popularidad decayó considerablemente⁵ ello parecía ir en provecho de su sucesor dentro del peronismo; en otras palabras, hasta mediados de 1997 la puja interperonista dominaba la escena política y parecía que en 1999 el nuevo presidente surgiría de su desenlace.

El viraje electoral de octubre fue posible por un cambio de las preferencias políticas. Hasta ahora el apoyo a la gestión Menem parecía derivar del clima de emergencia económica que se prolongó desde el inicio de su gestión. El voto oficialista era un apoyo que priorizaba la estabilidad económica, considerada amenazada en caso de triunfo opositor. Durante años esa prioridad asignada a la economía había disimulado un creciente descontento con el estilo político del gobierno. Varios factores, entre los que se cuentan la rutinización del funcionamiento económico y el cambio sin mayor problema del ministro de Economía, cargo considerado garante de estabilidad, debilitaron la eficacia del llamado gubernamental a votar por la continuidad del poder para asegurar la estabilidad.

La constitución de la Alianza posibilitó la ruptura de la lógica de la emergencia económica. Por una parte, las garantías de gobernabilidad que ofrece la coalición opositora aventaron los miedos pasados, sobre todo en los medios empresarios; y éstos tuvieron señales de confianza y prescindencia que se difundieron a los sectores sensibles a este tipo de argumentos. Por otra parte la coalición, pese a su compromiso de continuar con ciertos parámetros de la política económica, apareció como una promesa de cambio ante los sectores damnificados por la modernización económica.

Voto rechazo de significación nacional

Aunque las elecciones del 26 de octubre fueron convocadas para la renovación parcial de la legislatura nacional y provinciales, por lo que la conformación de las listas era de resorte de cada distrito, la campaña electoral terminó adquiriendo un carácter decididamente nacional. No era evidente que se produjera tal unificación y la consiguiente polarización, puesto que en principio el humor de crítica al gobierno nacional aconsejaba al oficialismo recostarse en los ámbitos locales. En varias provincias la población valoraba mejor las gestiones de los gobernadores que la del gobierno nacional.

La aparición en este distrito de un centro derecha desgajado del oficialismo, la Acción Republicana-Nueva Dirigencia (17,06%) explica buena parte de la disminución del voto oficialista respecto a los resultados obtenidos en 1995 y muestra otro polo embrionario de pluralismo político. Los resultados de la provincia de Buenos Aires fueron más polarizados e ilustrativos de la extensión de la ola de resistencia al actual poder. La Alianza obtuvo el 48,28% en tanto que el justicialismo el 41,44%. De este modo la Alianza avanzó un 6,87% respecto a las elecciones de 1995, en tanto que el PJ retrocedió el 10,53%.

⁵ Sus mejores índices de popularidad en el año 97 no alcanzaban al 17%.

Los pronósticos a nivel nacional habían descartado la posibilidad de un triunfo oficialista, pero el gobierno confiaba en atenuar la significación del resultado electoral explotando el hecho de que la oposición no hubiese logrado su unidad en todos los distritos⁶.

Sin embargo, la campaña se nacionalizó fuertemente como resultado de la confluencia del interés de la oposición en transformar las elecciones en un plebiscito crítico al poder central y anticipo de las presidenciales del 99, y el deseo del presidente Menem de mantener un protagonismo que contribuyera a preservar su poder durante los dos años finales de mandato. El principal damnificado de esta nacionalización fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, quien perdió centralidad y osciló entre persistir en su diferenciación y adherir a la estrategia presidencial.

Duhalde, que procuraba hacerse reconocer como candidato natural a la sucesión presidencial, había intentado estructurar una articulación política original asociando la revaluación de la vocación social del peronismo con la afirmación de intenciones democráticas capaces de extender su influencia hacia los sectores medios. Con esa intención había reforzado la acción clientelar a través de planes alimentarlos y de vivienda, alentado la movilización de la estructura partidaria y lanzando iniciativas que lo colocaran al frente de los reclamos contra la corrupción y por la seguridad. Ante el proceso judicial y la movilización social derivados del asesinato del periodista José Luis Cabezas a comienzos del 1997, buscó diferenciarse de las imputaciones de asociación con poderes mafiosos que se le hacían al círculo presidencial, a la vez que emprendió una resonante aunque insuficiente política de depuración de la policía bonaerense.

La Primera iniciativa de la Alianza fue afirmar su compromiso con la estabilidad económica y los aspectos centrales de la reforma económica, de modo de inhibir la Posibilidad de prolongar el consenso de emergencia. Desbaratar la polarización en torno al «modelo económico» insumió buena parte de las energías de la oposición y si lo logró fue en buena medida gracias a que designó como representante y coordinador del equipo económico a un reconocido experto en los medios empresariales. Se logró así acallar las voces disonantes dentro de la propia coalición, entre las cuales se contaba la de Raúl Alfonsín, presidente del Comité de la Alianza⁷.

⁶ Cómo debían computarse los resultados a nivel nacional fue una cuestión que estuvo en el debate público alimentada incluso por la reticencia o rechazo, según los casos, de los gobernadores radicales a que los votos partidarios de sus provincias se sumaran a los obtenidos por la Alianza en donde se había constituido.

⁷ Al pasar el radicalismo a la oposición, en 1989, el ala alfonsinista había procurado replantear los términos de una política que se pretendía progresista. Inicialmente se intentó una oposición dura prolongando el clivaje democracia/autoritarismo con el que el radicalismo había accedido al poder en 1983. Luego que ese esquema se revelara insuficiente ante las transformaciones que producía el peronismo liderado por Menem, y luego de haber cedido a las presiones del

El discurso opositor durante la campaña electoral no fue más allá de dar garantías de continuidad en el plano económico y prometer reforzar su acción legislativa para la mejora institucional y la adopción de políticas sociales. Es decir, llevó a cabo una campaña sin estridencias y sin grandes promesas programáticas, a la vez que se prometía una oposición parlamentaria constructiva. Este perfil permitió recoger un voto rechazo de sensibilidades bastante diversas. Una vertiente provenía en buena medida de los sectores partidarios de la modernización emprendida por Menem –o resignados a ella– que buscaban una reforma que tornara al poder políticamente confiable. Entre estos sectores se hallaban algunos que habían votado a regañadientes por Menem en las elecciones de 1995. Pero otra vertiente se sentía víctima de las transformaciones ocurridas y encontraba en el voto opositor una expresión del rechazo a lo que consideraba «el modelo». Probablemente muchos opositores «económicos» votaron a la Alianza por una combinación de dos tipos de sentimientos. Entre las víctimas del modelo existen quienes no anhelan un retorno al pasado, y en consecuencia esperan soluciones de líderes que les formulan un mínimo de promesas sociales. Otros probablemente más radicalizados votaron por una opción con posibilidades reales de gravitar políticamente, pero manteniendo un alto grado de desconfianza y un bajo grado de lealtad con sus representantes.

Ambas vertientes expresan un voto rechazo que indica la heterogeneidad y eventualmente fragilidad del voto aliancista. Los primeros rechazan el estilo político menemista pero son expectantes respecto a las garantías que dé la oposición sobre la política económica, y probablemente su alineamiento futuro dependerá de quién sea el candidato presidencial. Los segundos se comportarán según se presente la oferta electoral y su disposición a continuar votando por la Alianza dependerá también del perfil del candidato presidencial, pero sus requerimientos al respecto son distintos y probablemente contradictorios con los del primer grupo.

De algún modo, las elecciones cristalizaron tendencias que se venían perfilando. Pese a que los últimos años, en particular desde el pacto de Olivos,

poder para firmar el pacto de Olivos que permitió la reelección presidencial, esta corriente del radicalismo se postuló como campeona de la lucha contra el modelo económico. La sospecha que Alfonsín propiciaba un segundo pacto de Olivos se originó en su insistencia en proponer la unidad de todos los políticos –lo que parecía incluir al propio Menem– contra el poder económico. Este sector del radicalismo se mostró particularmente reticente a tratos con el Frente Grande y el Frepaso, encarnando una suerte de patriotismo radical. Pese a las divisiones dentro del radicalismo, en particular las provocadas por la firma del pacto de Olivos, Alfonsín continuó siendo el líder con mayor predicamento en el partido. Fue su repentina disposición aliancista, quizás influenciada por el fracaso anunciado de la lista radical que él mismo encabezaba en la provincia de Buenos Aires, la que posibilitó la unificación de la oposición. Pero, una vez constituida la Alianza y pese a que el coordinador económico de la nueva agrupación era un radical ex-funcionario de su gobierno, Alfonsín tuvo posiciones críticas de aspectos de la estabilidad económica ubicándose «a la izquierda» de los otros líderes y expresando una sensibilidad nacionalista.

se caracterizaron por una difusa oposición donde se mezclaron iniciativas políticas, la acción de la prensa y algunas reacciones de la sociedad –entre ellas las sindicales–, el factor dinámico ha sido el liderazgo del Frepaso. Esta fuerza ha terciado en la política argentina porque sus dirigentes supieron advertir positivamente las transformaciones socioeconómicas producidas y propiciar reformas apropiadas a las nuevas condiciones existentes. Reformas sociales, pero sobre todo propuestas de reconstrucción institucional que han sido sensibles al hecho de que la corrupción que se sospecha en la cúspide del poder y la ostentación de bienes por parte de los gobernantes produjeron un bloqueo en la identificación de los gobernados con el gobierno, a lo que se suma el decisionismo y la concentración de poder que han favorecido el usufructo de los bienes públicos, con un valor independiente de degradación institucional, muy negativamente percibidos por nuevas franjas de ciudadanía con sensibilidad republicana.

Este nuevo clima político influyó en el modo en que se constituyeron las candidaturas. Guiados por los índices de popularidad de los líderes y sus chances ante sus presuntos adversarios, los partidos –es decir los líderes estratégicos– fueron cambiando las candidaturas y los procedimientos de selección. De los estudios surgía que la intención de voto partidista era variable según el candidato que fuera cabeza de lista. El caso mas ilustrativo fue el de la provincia de Buenos Aires, donde inicialmente los partidos se aprestaban a seleccionar sus candidatos según la competencia interna. La alteración se produjo cuando el Frepaso envió a la popular senadora por el distrito capital, Graciela Fernández Meijide, como primera por la provincia. Su Popularidad llevó por una parte al gobernador Duhalde a suspender los comicios internos de su partido y colocar a su esposa, Chiche Duhalde, reconocida por su acción social asistencialista, como rival de Fernández Meijide. Por su parte en el radicalismo la perspectiva de una polarización que los marginara llevó al ex-presidente Alfonsín a encabezar la lista de la UCR. Finalmente la formación de la Alianza opositora simplificó la competencia, quedando frente a frente dos figuras que representaban respectivamente la lucha contra la corrupción y la sensibilidad social por los necesitados. Ambas candidatas venían de fuera de la política tradicional⁸.

Nuevas escenas y actores políticos

Estas elecciones han sido las primeras que pierde el peronismo estando en el poder. En este sentido su significación para el pluralismo político es mayor as

⁸ Aunque Fernández Meijide había sido ya candidata en 1991 Y luego fue electa diputada y senadora, su imagen pública se enraíza en la Militancia por los derechos humanos ante la desaparición de un hijo durante la dictadura militar. Chiche Duhalde dirigía una fundación de asistencia social en barrios carenciados con fondos de la gobernación. Pese a ser esposa del gobernador quiso imprimirle a su acción un carácter apolítico, pero al inicio de la campaña electoral y valiéndose de su red de mujeres involucradas en la acción social procuró lanzar la corriente interna «evitista» (por Eva Perón).

que tuvieron las inaugurales de la democracia en 1983⁹. El resultado alcanza un significado que trasciende los avatares de la competencia política para constituirse en signo de un cambio en las formas políticas, tanto en las instituciones como en las costumbres.

Pese a que las encuestas pronosticaban una derrota del oficialismo, su magnitud fue inesperada para la opinión pública e incluso para la mayoría de los expertos. Fue particularmente sorprendente el resultado adverso al oficialismo en las principales provincias y especialmente en la provincia de Buenos Aires¹⁰. La persistencia con que la opinión pública y buena parte de los analistas políticos preveían el triunfo de la lista peronista en este distrito y el escepticismo con que los propios dirigentes de la Alianza recibían los pronósticos favorables que daban algunas encuestas –aunque con márgenes menores de los que finalmente se registraron– revelan la afirmada creencia de que la conjunción de los resortes del poder provincial, el amplio aparato partidario y el voto popular cautivo eran indoblegables¹¹. Incluso el hecho de que se pensara que un resultado eventualmente favorable pudiese ser revertido por medio de un fraude generalizado da una idea del poder que se atribuía a las estructuras de gobierno.

Los resultados obtenidos por la Alianza hacen presumir el crecimiento del voto independiente. Pero esta afirmación no deber ser entendida simplemente como la existencia y ampliación de una disposición subjetiva a formar preferencias políticas participando de algún modo del debate público. Este reforzamiento de la ciudadanía se produce a través de dos vertientes: transformación de las instituciones políticas y cambio en las costumbres.

El cambio institucional constatado en la reciente campaña electoral consiste en la formación de un nuevo espacio público político en el que el rol de los medios televisivos es predominante como vehículos y aun como gestores de la comunicación política. Este predominio no excluye las iniciativas de los profesionales políticos. La dinámica política está marcada por los candidatos y líderes que en su actividad electoral recurren a los programas televisivos

⁹ En esa oportunidad los militares en retirada llamaron a elecciones en las que triunfó Alfonsín como candidato radical. Era la primera vez que el peronismo era derrotado en elecciones libres. Y esa circunstancia permitía prever para la naciente democracia una competencia política más efectiva. Desde que el peronismo fue desalojado del poder en 1955 su triunfo electoral había sido considerado inevitable, por lo que quienes lo veían como una amenaza por sus promesas sociales o por sus postulados autoritarios buscaron excluirlo de la competencia política a través de procedimientos proscripivos. Durante años la conformación de un sistema político estable se halló amenazada por los dilemas que acarrearaba la existencia de una fuerza hegemónica resistida tanto por la presunta amenaza social como por su desafío a los principios democráticos.

¹⁰ El peronismo fue derrotado en la mayoría de las provincias y particularmente en las más importantes: Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza. En estas dos últimas no en manos de la Alianza sino de la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata (de origen conservador), respectivamente.

¹¹ Encuesta Mori.

(políticos y no políticos), a la campaña territorial cuyo recurso más característico es la caravana, y a la difusión de propaganda por los medios (TV, radio, prensa, calle) y a través del aparato partidario. Debe notarse que este orden de las escenas de comunicación política es inverso al vigente hace solo tres lustros, cuando comenzaba la democratización.

No se trata de un simple cambio de recursos, sino de una transformación global de la política que repercute en la organización partidaria. Así, respondiendo a los requerimientos de la escena massmediática el equipo de cada candidato principal concentra las decisiones de la campaña convirtiéndose en un verdadero centro de poder partidario –reforzado por la capacidad que tienen los candidatos estrella de influir en la composición de toda la lista de candidatos. Las estructuras existentes o bien se subordinan a esa dinámica o bien actúan en paralelo. Los militantes organizan una actividad territorial mínima o se suman a las iniciativas centrales de los candidatos (caravanas, caminatas, etc.); pero la actividad militante pública tiene también como epicentro la figura del candidato massmediático.

La escena massmediática reconoce nuevas reglas de información y decisión políticas que desplazan al partido del rol central que ocupaba antaño. Las pesadas o frágiles –según los casos– estructuras partidarias son sustituidas por las encuestas y por el 'feeling' de los comunicadores. Los «ojos y oídos» que en el pasado constituían las redes partidarias y sociales no son mas confiables para los dirigentes¹². Este lugar es ocupado por las encuestas que suministran información sobre preferencias y expectativas sobre la base de entrevistas individuales y que permiten clasificar las tendencias según diferentes criterios objetivos. La sociedad transformada en masa de agregados individuales parece ser una fuente más apropiada para la acción política que la sociedad considerada en su fisonomía concreta.

Las orientaciones de la campaña y las intervenciones públicas son diseñadas a partir de ese suministro básico al que se suma el diagnóstico sobre la estrategia del adversario. En este contexto existe aún la posibilidad de innovación pero el riesgo que adopta un líder al innovar y proponer implícitamente un realineamiento de lealtades es destruir la parte del consenso en que se situaba.

En la campaña para las elecciones legislativas la gran innovación política fue la propia constitución de la Alianza y ulteriormente su posicionamiento modernizante. Esta innovación se produjo en el contexto de la nueva comunicación massmediática. Los contactos entre las fuerzas que se aliaron se hilvanaron entre los dirigentes, con frecuencia en los estudios de televisión, sin consultas significativas en los ámbitos partidarios. Las estructuras se

¹² Dirigentes de algún partido de oposición consideran tan indiferente para el resultado electoral la presencia territorial partidaria, que afirman que se produce más adhesión ciudadana donde no existen locales partidarios que en donde sí los hay.

encontraron relegadas¹³ y se revelaron ineptas frente al lazo dirigentes-opinión pública permanentemente activo a través de los medios de comunicación. Antes de poder reaccionar, las distintas instancias partidarias reciben las reacciones de la opinión pública vía encuestas, lo que condiciona toda deliberación. Pero las instancias partidarias definieron la presentación de las listas a nivel local, la fiscalización de la campaña electoral y otros aspectos de la competencia política. A este nivel los dirigentes intermedios adoptaron las decisiones.

En la medida en que la actividad política ha dejado de ser la expresión de identidades consagradas –como era el caso cuando el principio organizador era el clivaje izquierda/derecha– las iniciativas políticas están más libradas a la acción de personalidades de los dirigentes y son tanto más eficaces cuanto menos condicionadas están por la estructura partidaria. Esta creciente disociación entre estructura partidaria y sociedad (apareciendo esta última como opinión pública) plantea sin embargo un problema para una oposición que pretenda introducir cambios significativos. Sin caer en el vanguardismo de los proyectos revolucionarios, el procurar un cambio, aunque tibio, requeriría de una estructura partidaria cohesionada en torno a ciertos principios, sin lo cual se carecería del elenco necesario para gobernar de un modo diferente y de los militantes que puedan ser agentes de los cambios a nivel micro social.

Las transformaciones en las formas políticas argentinas venían manifestándose a lo largo de la década¹⁴, siendo su ámbito característico la Capital Federal. En este ámbito restringido se reconocía el predominio de una ciudadanía independiente: informada y sin lealtades partidarias fijas. Hoy este proceso de autonomización política parece estar en pleno proceso de expansión. Los resultados de las últimas elecciones muestran que los sectores populares parecen haber roto con su identidad peronista tradicional y algunos grupos socialmente excluidos se han apartado de sus lealtades clientelares.

El surgimiento de una opinión pública independiente es reciente y su manifestación inicial se remonta a la aparición del movimiento de derechos humanos. Este movimiento, solitario en su inicio, se constituyó con independencia de las redes estatales y de la sociedad partidaria y corporativamente estructurada. El movimiento fue exitoso promoviendo la difusión de una conciencia de derecho y suscitando una justicia retroactiva. Durante los años 80 se mostraron los signos de una opinión pública que se

¹³ El Frepaso es una estructura con siete subgrupos partidarios de peso desigual –pero igualmente representados en la junta nacional–; aunque solo fuese por esa característica carece de una instancia decisoria alternativa a las decisiones individuales de sus líderes Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide. En cuanto a la UCR, sus instancias decisorias más legítimas, como la convención nacional, son de difícil reunión y el poder ejecutivo real está disperso entre los líderes regionales, aunque la autoridad de Alfonsín es la que puede comprometer a la organización.

¹⁴ Ver al respecto I. Cheresky: «¿Hay todavía lugar para la voluntad política? Consenso economicista, liderazgo personalista y ciudadanía en Argentina», presentado al seminario Desarrollo institucional y crisis de la representación política, Instituto Superior de Estudios de la Nación, Buenos Aires, 25-28/7/1995.

manifestó reiteradamente con independencia de los dos partidos tradicionales. La modernización de la economía y el Estado generó otra fuente de reivindicaciones en términos de derechos no enteramente divorciada de la anterior, pero más basada en la crítica del estatismo y el corporativismo. Esta conciencia de derechos de formación reciente constituye el núcleo de la audiencia massmediática democrática: ciudadanía informada y dispuesta a ejercer su libertad política, pero no participativa en el sentido tradicional. Como se ha señalado, su visibilidad política se amplió cuando en 1995 expresó políticamente su rechazo al pacto de Olivos a través del voto al Frente Grande y ulteriormente al Frepaso.

En las recientes elecciones legislativas la extensión de esta conciencia de derechos se expresó bajo la forma de la interrogación sobre el «voto de los sectores medios». Esta preocupación se relacionaba especialmente con la repercusión del asesinato de José Luis Cabezas y los avatares de la investigación que hacían recaer la sospecha de la autoría intelectual en un empresario estrechamente vinculado con el poder. Que el gobernador Duhalde pusiera de relieve el carácter político del hecho y sostuviera que la suerte de su candidatura presidencial estaba asociada a la resolución del crimen ilustra la centralidad de las nuevas demandas de la sociedad. Por cierto hay una oscilación entre una demanda autoritaria de seguridad y una demanda política de seguridad¹⁵. Esta última manifiesta preocupación por la constitución de un Estado más imparcial, distante de los intereses y que no sea botín de quienes acceden al poder.

Las tendencias apuntadas permiten afirmar que el peronismo en el poder está colocado al margen del consenso democrático-republicano en expansión, que parece difundirse desde la metrópoli hacia el interior. El interrogante en vistas a las elecciones del 1999 es si esta fuerza que en su versión menemista dominó la política nacional a lo largo de esta década, logrará reubicarse ante la nueva situación. La presunción de la invencibilidad peronista se ligaba a su poder estatal y partidario por cierto, pero ello no era considerado sino una derivación de su representación social. El peronismo aparecía como invencible en su condición de partido de los trabajadores y de los pobres. Se expresaba de ese modo una idea tradicional de primacía de lo social sobre lo político. En esta concepción se articulaban dos nociones. Por un lado, que la condición social popular creaba una impenetrabilidad a la política: los trabajadores y los pobres se relacionarían con la política buscando simplemente trasladar al ámbito general los reclamos provenientes de su condición social. Por otro lado, se supone una cautividad política de los sectores populares consistente en que la representación de lo social por el peronismo era indisputable.

¹⁵ En las recientes elecciones, el ex-militar rebelde y dirigente político de ultraderecha Aldo Rico fue consagrado intendente de la localidad bonaerense de San Miguel, para actuar con mano dura. Sucede a dos intendentes justicialistas apartados por corrupción. Muchos votantes de Graciela Fernández Meijide para diputada dividieron su voto a nivel municipal en favor de este candidato que promete seguridad.

El desgranamiento del voto Popular peronista indica una desarticulación de la relación Populista entre lo social Y lo político. Lo social esta dejando de tener encarnaciones únicas y ciertos sectores no consideran ya que su condición social tenga una traducción política natural; por otra parte las prestaciones sociales están dejando de ser una contraparte segura del comportamiento político.

Los problemas de una alternativa reformista

A consecuencia de las elecciones legislativas se delineó un proceso de constitución de dos campos, que según los pronósticos actuales debería consolidarse en vistas a las elecciones presidenciales de 1999. No se trata de un retorno al bipartidismo sino de una bipolaridad que comporta conflictos en cada uno de los ámbitos y eventualmente movimientos de pasaje de uno a otro.

El oficialismo se halla tensionado entre las pretensiones del presidente Menem que no puede reelegirse¹⁶ pero aspira a mantener un poder sólido hasta, el fin de su mandato –que se debilitaría con un candidato con vocación de iniciar otro reinado como sería el caso de Duhalde– y a ejercer una influencia ulterior en la vida política, y ser el principal candidato oficialista de la oposición. El enigma de Duhalde, cuya imagen se ha deteriorado por el fracaso de su esposa, es cómo recomponer su imagen política siendo que no puede presentarse como candidato de la continuidad ni como encarnación de la identidad peronista, ante su disolución. La articulación que intentó hacer contradictoriamente en los últimos meses, apeló a líneas argumentales no del todo compatibles y de las cuales no es forzosamente el sujeto verosímil: la tradición peronista de justicia social, los éxitos en la política de estabilización económica y los nuevos reclamos democráticos de la ciudadanía independiente.

Se le plantean dilemas de difícil solución: ¿cuánto diferenciarse del gobierno y en qué aspectos? La crítica al «modelo económico», compatible con una línea argumental de retorno a las fuentes peronistas –practicada en la última campaña través del evitismo, los representantes sindicales y empresarios en las listas de candidatos, el retorno esporádico a una crítica corporativista de la democracia puede alejarlo de los sectores medios directa e indirectamente, por el efecto descalificatorio que provenga de la crítica de los expertos nacionales e internacionales y de los medios empresarios. Por otra parte, el alejamiento de Menem puede estimular a éste a brindar apoyo a candidatos presidenciales alternativos.

La constitución de la Alianza y su triunfo electoral ha tenido como consecuencia un reforzamiento de la presencia parlamentaria opositora, aunque el peronismo

¹⁶ Según indicios, parte de su entorno no ha renunciado a la posibilidad de forzar una interpretación constitucional de la Corte Suprema que permita a Menem competir nuevamente en 1999, pero por el momento esta eventualidad parece descartable.

continúa siendo la primera minoría en Diputados y mantiene una amplia mayoría en el Senado. Si bien las condiciones y prácticas hegemónicas del gobierno persisten (la Corte Suprema y algunos jueces se someten escandalosamente a la voluntad del Ejecutivo, éste sigue gobernando por decretos de necesidad y urgencia sin que esa práctica sea controlada por el parlamento como lo indica la Constitución) hoy se ven un tanto debilitadas. En el parlamento es donde el poder de Menem encuentra cierta resistencia entre sus propios fieles, hasta el momento de forma esencialmente pasiva. Las elecciones han mostrado que la oposición puede unir sus fuerzas y que tiene pese a sus diferencias internas la voluntad de hacerlo en la perspectiva de la elección presidencial. De modo que la constitución de la Alianza ha transformado una situación abstracta, el descrédito político de Menem y la mayoría potencial de sus opositores, en la posibilidad concreta de una alternancia en el poder. Los antecedentes de competencia entre los socios de la Alianza no hacían evidente que esta posibilidad se concretara.

Ahora, la Alianza debe construir su credibilidad a través de su acción parlamentaria y pública en un equilibrio entre, por una parte, sostener una crítica a un gobierno que actúa con escaso compromiso con la legalidad republicana, lo que la obliga a acciones enérgicas so pena de aparecer comprometida con el funcionamiento distorsionado de las instituciones, y por otra parte hacerse cargo de su responsabilidad de oposición legalista desarrollando una cultura de gobierno.

La Alianza se ha constituido como una alternativa que reivindica la voluntad política, es decir que busca cambios significativos en la organización político social por una acción intencional desde el poder. Esta ambición enfrentará varios desafíos. El primero de ellos tiene que ver con la percepción adecuada del modo como se conforman hoy las iniciativas políticas. Pensar que la oposición expresa directamente una demanda de la sociedad sería simplificar las actuales relaciones de representación. Las posibilidades de una política «postmenemista» han surgido de los dirigentes enfrentados al desafío de elaborar una orientación apoyada en las insatisfacciones y descontentos sociales, para sobre esa base crear una identidad específicamente política. Esta relación no simplemente mimética de la sociedad se complica por el hecho de que la Alianza postula una justicia social cuyos principales beneficiarios votar por el oficialismo, lo que subraya aún más la distancia entre la identidad política y realidad social.

La Alianza se ha trazado una estrategia de ampliación acorde con el actual carácter difuso de las identidades políticas, cuya síntesis es la «transversalidad». La transversalidad significa la búsqueda de afinidades político-ideológicas por sobre las estructuras partidarias, pero también se relaciona con el cambio de las relaciones de fuerza y la eventualidad del acceso al poder, con la propensión a cambiar de bando por motivos oportunistas. En este sentido, el peligro para la Alianza es que una vez en el poder la

incorporación de elementos del oficialismo debilite su capacidad crítica y su disposición a emprender reformas.

Finalmente, la Alianza hará la prueba de su cohesión si logra sobrellevar exitosamente la puja entre sus componentes por la candidatura presidencial. En algún sentido la medición de fuerzas por ese cargo definirá la hegemonía dentro de la coalición y producirá reacomodos difíciles para las fuerzas integrantes. La Alianza se halla también ante el desafío de formular los términos programáticos de una alternativa reformista. Este desafío es tanto más apremiante cuanto que la competencia electoral del 99, tratándose de elecciones presidenciales y no habiendo posibilidades de continuidad de Menem –por lo que no se plantearía el voto castigo en los mismos términos que en las últimas legislativas– estará regida por una lógica de competencia donde pesará mas la promesa y la exhibición de capacidades de gestión.

Las posibilidades reformistas tienen dos órdenes de restricciones: las provenientes la de la inserción en un mundo globalizado y las derivadas de las relaciones poder en el país. La reforma más significativa e inmediata que promete la Alianza se refiere al modo de gobernar: recuperar la política tiene el sentido primero de articular un poder en el que la sociedad pueda reconocerse representada, al contrario de un poder sostenido tan solo en la eficiencia o en los temores antes su reemplazo.

El modo de gobernar se expresa en el funcionamiento del Estado y es otra dimensión de la reforma que debería alcanzar la Alianza. La reforma estatal buscó liberar el mercado y suprimir el déficit fiscal hizo bajo el signo de la crítica al estatismo, pero el ausentismo estatal en la regulación de los servicios básicos y la debilidad de las políticas sociales han creado nuevas disposiciones en la sociedad. Ahora la reconstrucción del control estatal –división de poderes, y el papel de contralor de la oposición sobre los funcionarios públicos, la regulación de las empresas de servicios públicos– y la mejoría de sus atribuciones fiscales son percibidas como requisitos de un orden justo. Este ordenamiento tendría como consecuencia la liberación de fondos que se podrían destinar a mejorar las políticas sociales.

De modo que el núcleo de la promesa aliancista, según el perfil actual de sus planteos, sería sanear el Estado de la corrupción y la arbitrariedad a través de la mejor calidad de sus instituciones. Los primeros pasos hacía la justicia social se derivarían de ese saneamiento.

Solo un Estado que recupere su prestigio ante los antiguos y actuales usos indebidos podría tener objetivos distribucionistas más ambiciosos. Una reconstrucción del Estado se orientaría a recuperar áreas públicas que han sido transferidas al mercado entera o parcialmente y que se hallan deterioradas. La idea de bases materiales de la ciudadanía se inspira en la tradición europea de

Estado de bienestar y es distinguible de la pretensión de democracia sustantiva. Se trata de recuperar el concepto de una ciudadanía que se constituye en referencia formal a los derechos iguales, pero que acompaña los enunciados con una experiencia efectiva de derechos comunes consistente en que todo ciudadano tiene acceso a los servicios básicos de salud y educación con prescindencia de su condición social, y que estas prestaciones son de una calidad tal que a ella recurre la generalidad de la gente. A estas prestaciones suelen agregarse otras ligadas al desempleo, las cargas familiares, etc. Pero, avanzar en la progresividad fiscal para efectuar una redistribución de esa magnitud requeriría una dinámica política que recreara la confianza en lo público. ¿Será posible «nadar contra la corriente» y recrear áreas desmercantilizadas? ¿Será posible que ellas compitan eficientemente con los servicios privados? ¿Podrá crearse un sentimiento de responsabilidad en las actividades sociales fuera de los ámbitos privatizados?

Tales son los interrogantes que deberá responder una coalición reformista y de su capacidad para hacerlo dependerán sus posibilidades

Buenos Aires, diciembre de 1997